



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EXPTE: 32249/2024

“V.F.BOLLINI S.R.L. c/AFIP-DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir el voto en el siguiente orden:

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

V.F. Bollini S.R.L. impugna la resolución N° 2245-E-2022 de AFIP que hizo lugar parcialmente a un pedido de revisión contra la anterior resolución 1212/2018 dejando sin efecto la deuda intimada respecto al empleado Ever Adrián Duarte y confirma la deuda con relación al trabajador Héctor Maximiliano Miño.

Cabe tener presente que el reclamo se fundamentó en inconsistencias detectadas en cuanto a las fechas de ingreso y diferencias salariales, alcanzando la suma de \$156.724,06 (comprensivo de \$32.589,19 en concepto de capital, \$91.545,68 por intereses calculados a la fecha de presentación del recurso y de \$32.589,19 por multa).

La parte actora, cuestiona lo decidido pues si bien AFIP hizo lugar parcialmente al pedido de revocatoria presentado, confirmó el reclamo en lo referente al trabajador Miño para lo cual en su opinión, se aparta de la realidad, basando su decisión en la declaración testimonial del entonces dependiente, quien al momento de la inspección incurrió en un error al consignar el año de inicio de actividades.

Reitera que la fecha exacta de inicio de tareas del Sr. Miño para V.F. Bollini SRL es la del alta suministrada por la empresa ante AFIP -03/2015- y no 03/2014 como pretende el organismo, por lo que peticiona se deje sin efecto la sanción impuesta.

El presentante no dio cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 15 de la ley 18.820. Tampoco invocó imposibilidad de hacerlo.

Ahora bien, a partir de la modificación implementada por la ley 27.742, a través de su artículo 44, se incorporó el artículo 25 bis al texto de la ley 19.549, el que en su cuarto párrafo expresamente dispone: “Cuando el acto administrativo recurrido hubiere impuesto una sanción pecuniaria su cumplimiento no podrá ser exigido como requisito de admisibilidad del recurso judicial. Quedan derogadas todas las prescripciones normativas que dispongan lo contrario”, y en el caso ambos reclamos patrimoniales resultan prácticamente inescindibles, lo que autoriza su revisión judicial en base a lo prescripto por los artículos 17, 18 y 109 de la Constitución Nacional.

En cuanto al fondo del planteo sometido a conocimiento de este Tribunal, la lectura de la causa revela que, con base en una inspección llevada a cabo en la sede de la impugnante, se determinó la existencia de dos trabajadores, supuestamente inscriptos en forma tardía, y/o con



montos remunerativos presuntamente inferiores a lo efectivamente percibido, lo que dio lugar al reclamo administrativo en concepto de deuda previsional impaga sobre la base de la presunción de legitimidad que establece el art. 12 de la ley 19.549 en la redacción vigente al momento en que acontecieron los hechos.

Ahora bien, a partir del dictado de la Resolución N° 2245/2022, y como ya se adelantara, el organismo hizo lugar parcialmente al pedido de revisión oportunamente interpuesto por la empresa y dejó sin efecto la deuda determinada, en concepto de cotizaciones a la seguridad social por el periodo 08 a 11/2012 respecto al Sr. Ever Adrián Duarte.

Distinta es la conclusión a que se arribó respecto al dependiente Héctor Maximiliano Miño pues conforme surge del acta labrada, Miño habría desempeñado tareas desde el 03/2014 y no desde 03/2015 como denuncia la impugnante.

A posteriori la apelante acompañó una declaración testimonial en la que el trabajador manifiesta que su inicio de actividades se produce en marzo de 2015 y no como equivocadamente el inspector actuante consignó en el acta de relevamiento.

En dicha oportunidad el dependiente relató que antes de su ingreso a la empresa Bollini se desempeñó cumpliendo tareas para su padre, pero sin estar registrado como dependiente. También expresó que al momento de la inspección sus ingresos netos mensuales eran de \$4.000.

Sin perjuicio de lo anterior el organismo fundamentó su pretensión en que el peso específico de las declaraciones efectuadas por un dependiente, en el marco de un relevamiento, no pueden ser las mismas que aquellas realizadas con posterioridad, y en una audiencia propuesta por su empleador el cual, por el hecho de seguir siéndolo, condiciona sus declaraciones pudiendo interferir en la permanencia de la relación laboral, por lo que concluye dando preeminencia a la primera declaración formulada, al momento de la inspección.

En lo que respecta al ajuste intimado en concepto de diferencia salarial periodo 03/2015 advierte el organismo que ese reclamo es consecuencia de considerar la existencia de una relación laboral previa a la declarada por la quejosa.

Planteada así la cuestión, y con base en la documentación presentada por la apelante, entiendo que le asiste razón.

La presunción de legitimidad del acto administrativo al que hace referencia el art. 12 de la ley 19.549, recientemente modificado por el art.32 de la ley 27.742, es una presunción iuris tantum, que puede ser desvirtuada por el interesado con prueba en contrario (conf. Hutchinson Tomas “Régimen de Procedimientos administrativos. Ley 19.549” pág. 150 y sgtes. edit. Astrea 2017).

Ahora bien, en la causa obra, entre otros elementos probatorios, una carta documento dirigida por el Sr. Héctor Maximiliano Miño a V.F. Bollini SRL, recepcionada en el Correo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Argentino el 10/03/2022, por el cual se efectúan una serie de reclamos laborales y, entre otras cosas, se expresa que laboró para esa razón social desde el 16/03/2015 desempeñando tareas de cocinero con lo cual, queda despejada la duda respecto al momento de inicio de la relación laboral.

Dilucidado lo anterior, se torna sin sustento el reclamo del organismo “en concepto de diferencia salarial periodo 03/2015” pues según sus propios dichos ese reclamo se fundamentó en considerar la existencia de una relación laboral previa a la denunciada por la empleadora (ver fs. 128 de la prueba digital acompañada).

Cabe tener presente que en la dilucidación de un caso debe imperar el principio de verdad material o real, y el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba obteniendo una decisión fundada son las garantías que otorga nuestra Carta Magna a los justiciables constituyendo la base de nuestro sistema republicano de gobierno.

Planteada así la cuestión la pretensión del organismo, con base en las actas de inspección, infracción y determinación de deuda, queda sin sustento ante la probanza acompañada (conf. art.386 CPCCN).

Por último, y dada las particularidades, naturaleza, y alcance de la intervención en esta clase de asuntos de los organismos de fiscalización y control en el cumplimiento en la aplicación de las leyes de seguridad social, que por su situación no puede ser equiparado a la que normalmente revisten las partes en una contienda judicial (conf. Fallos 288:433) me llevan a proponer que las costas sean impuestas en el orden causado (conf. art. 68 2do. párrafo CPCCN).

Por lo expuesto, propongo se habilite la instancia judicial, revocar la resolución recurrida e imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do.párrafo CPCCN). Así lo voto.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

En virtud de todo lo expresado el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Habilitar la presente instancia judicial, 2º) Hacer lugar a la impugnación presentada, dejando sin efecto la resolución recurrida. 3º) Imponer las costas en el orden causado (art. 68 2do.párrafo CPCCN). Regístrese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

El Doctor Juan Fantini Albarenque no vota por encontrarse en uso de licencia.

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: JOSE MARIA SANCHEZ MOSCOSO
Prosecretario de Cámara

ALP.

